

Al contestar cite este número



Radicado No:
202620200000033171

Bogotá, 04 de febrero de 2026

Doctor
DAVID ANTONIO GARZÓN FANDIÑO
Secretario Comisión Segunda Permanente de Gobierno
COMISIONDEGOBIERNO@CONCEJOBOGOTA.GOV.CO
Concejo de Bogotá
Ciudad

ASUNTO: Respuesta Solicitud Radicado 1764914675

Cordial saludo,

De conformidad con la solicitud identificada con radicado 1764914675, y en el marco de las competencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) — en particular, de la Subdirección de Responsabilidad Penal— se procede a dar respuesta al cuestionario formulado, con alcance institucional y jurídico, en los términos que se exponen a continuación:

1. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el sistema de responsabilidad penal adolescente en su implementación actual?

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) se fundamenta en los principios de protección integral, corresponsabilidad y prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, conforme a la Ley 1098 de 2006. En particular, dicha ley establece que la garantía de derechos de esta población es una responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad y el Estado, y que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes constituye un principio de aplicación obligatoria en todas las actuaciones que los involucren. En este marco, la implementación del SRPA se desarrolla bajo un esquema de corresponsabilidad entre la Nación y las entidades territoriales, en el que concurren autoridades de la rama judicial y entidades del orden ejecutivo, y cuya coordinación se canaliza mediante el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SNCRPA), creado por el Decreto 1885 de 2015.

No obstante, en la implementación actual del SRPA persisten retos de carácter estructural y operativo. Se destacan, en primer lugar, las desigualdades territoriales en capacidad institucional para ejecutar de manera homogénea las medidas y sanciones, incluyendo brechas en infraestructura, talento humano, seguridad,

servicios especializados y oferta programática para la población adolescente y joven vinculada al sistema. En segundo lugar, se presentan dificultades en la atención integral en salud, particularmente en salud mental y en el acceso oportuno, continuo y especializado a servicios, lo cual demanda fortalecer la articulación efectiva con el sistema de salud. En tercer lugar, se observan asimetrías en la financiación territorial del SRPA, que inciden en sostenibilidad y cobertura de servicios, así como en la posibilidad de fortalecer la infraestructura y las condiciones de operación y seguridad de los centros, ampliar la oferta de justicia restaurativa y consolidar estrategias de acompañamiento durante el cumplimiento de medidas y en el postgreso. Finalmente, se identifica un acceso limitado a oportunidades educativas, formativas, laborales y comunitarias sostenibles para adolescentes y jóvenes durante y después del cumplimiento de medidas, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la articulación intersectorial y la consolidación de redes territoriales que faciliten proyectos de vida en el marco de la legalidad y contribuyan a la prevención de la reincidencia.

2. ¿Qué mecanismos existen para garantizar el debido proceso en los adolescentes en conflicto con la ley?

La garantía del debido proceso en el marco del SRPA se encuentra radicada, de manera principal, en el ámbito de actuación de las autoridades judiciales competentes y de los órganos del Ministerio Público, quienes ejercen las funciones constitucionales y legales relacionadas con la defensa, la vigilancia de las garantías procesales y el control sobre la legalidad de las actuaciones. En consecuencia, y conforme a la recomendación recibida, la Subdirección de Responsabilidad Penal informará el **traslado por competencia** a la Defensoría del Pueblo, con el fin de que, en el marco de sus funciones, emita el pronunciamiento que corresponda sobre los mecanismos específicos para garantizar el debido proceso de los adolescentes en conflicto con la ley. Sin perjuicio de lo anterior, se reitera que el SRPA constituye un sistema especializado, y que las actuaciones que se adelantan deben observar las garantías propias del debido proceso, con especial protección derivada del interés superior del niño y la protección integral.

3. ¿Cómo se articula el trabajo entre el ICBF, la Policía, la Fiscalía y los jueces para atender a los adolescentes?

La articulación entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales se desarrolla en el marco del SRPA a través del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SNCRPA), creado y reglamentado mediante el Decreto 1885 de 2015. Dicho sistema constituye la instancia prevista para coordinar la articulación interinstitucional, intersectorial e intersistémica de los actores que integran el SRPA, tanto en el proceso judicial como en el proceso administrativo asociado a la garantía de derechos y a la atención especializada.

En este marco, cada entidad actúa conforme a sus competencias constitucionales y legales: la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación intervienen en el proceso penal adolescente en los ámbitos de su competencia; las autoridades judiciales adoptan y controlan las decisiones sobre medidas y sanciones; y el ICBF participa en la coordinación técnica e institucional y en el desarrollo del componente de atención especializada, en armonía con las orientaciones del SNCRPA. Esta

coordinación busca asegurar respuestas coherentes, oportunas y articuladas para la garantía de derechos, la atención integral, el egreso y la prevención de la reiteración, bajo el principio de corresponsabilidad entre Nación y territorio.

4. ¿Qué programas específicos ofrece su entidad para la resocialización de adolescentes infractores?

En el marco de las competencias institucionales, la Subdirección de Responsabilidad Penal implementa acciones orientadas a la inclusión social y a la construcción de proyectos de vida de adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA, conforme a los lineamientos y manuales vigentes: el Modelo de Atención para Adolescentes y Jóvenes en Conflicto con la Ley – SRPA, el Manual Operativo de las Modalidades que Atienden Medidas y Sanciones del Proceso Judicial – SRPA y el Manual Operativo de Medidas Complementarias y Alternativas al Proceso Judicial – RAJ.

El Lineamiento Técnico establece fases de atención, entre ellas la fase de proyección, orientada a consolidar el proyecto de vida mediante el desarrollo de habilidades laborales, la autonomía y el fortalecimiento de comportamientos prosociales. De igual forma, contempla la fase de pre-egreso, cuyo propósito es preparar una integración digna y equitativa a la sociedad mediante acciones asociadas al fortalecimiento de habilidades ocupacionales, la toma de decisiones, la resolución de conflictos, la continuidad educativa, la inserción laboral y la consolidación de redes familiares y sociales protectoras.

Adicionalmente, el Manual Operativo de Medidas y Sanciones Judiciales incorpora la Estrategia de Atención Especializada Pre-egreso, que facilita la vinculación gradual a redes públicas y privadas, instituciones educativas, actividades culturales y deportivas y programas de formación laboral, promoviendo procesos de reintegración social con enfoque preventivo de reincidencia y, cuando corresponda, con validación judicial. Complementariamente, el Manual RAJ orienta acciones para fortalecer la inclusión social mediante planes de vida, evaluación de redes de apoyo, acompañamiento personalizado y promoción de conductas prosociales.

En la dimensión de generación de oportunidades, en distintos territorios se han movilizado acciones orientadas a la consolidación de alianzas público-privadas que faciliten acceso a oferta educativa, formativa y laboral. En este contexto, el ICBF ha articulado esfuerzos con el SENA y con organizaciones sociales y privadas para promover programas de inclusión social y laboral, reconociendo que su efectividad depende del acompañamiento institucional, la preparación integral de los jóvenes y la sensibilización frente a barreras y estigmas. Durante 2025 se avanzó en el componente de generación de oportunidades mediante identificación de oferta y necesidades en regiones priorizadas, y se promovieron acciones interinstitucionales en ámbitos educativo, laboral, productivo y cultural, con articulaciones que incluyen, entre otras, el fortalecimiento de programas de formación ocupacional y el acceso a la Agencia Pública de Empleo del SENA, así como iniciativas conjuntas con actores académicos y sociales para favorecer el tránsito educativo, la inclusión laboral formal y el fortalecimiento de habilidades personales y productivas.

5. ¿Cuál es el seguimiento que se realiza a los adolescentes después de cumplir una sanción?

El seguimiento posterior al cumplimiento de una sanción se desarrolla, entre otras herramientas institucionales, mediante la modalidad denominada **Apoyo Post-Institucional**, prevista en el Manual Operativo de Medidas Complementarias y Alternativas al Proceso Judicial - Restablecimiento en Administración de Justicia (RAJ). Esta modalidad permite el acompañamiento y seguimiento a adolescentes y jóvenes egresados del SRPA, mediante ubicación de autoridad administrativa cuando corresponda, y se orienta a dar sostenibilidad a los logros alcanzados durante el cumplimiento de la medida o sanción. Su enfoque es sociofamiliar y comunitario, y se dirige al fortalecimiento de la autonomía, el agenciamiento, las habilidades y talentos del adolescente o joven, promoviendo su integración e inclusión social en equidad. Para ello, se contempla la actualización o ajuste del Plan de Atención Individual con participación del adolescente o joven y su red vincular de apoyo, así como la gestión de articulaciones para continuidad de derechos, especialmente en salud, educación, formación para el trabajo y participación. La modalidad contempla un esquema de acompañamiento periódico con sesiones de trabajo con el adolescente o joven y su familia, orientadas a fortalecer trayectorias de vida en el marco de la legalidad y a reducir riesgos asociados a la reiteración.

6. ¿Existen indicadores que midan el éxito de los procesos de reintegración?

Existen instrumentos de política pública nacional que incorporan indicadores de seguimiento relacionados con componentes críticos del SRPA, en especial aquellos asociados al fortalecimiento de sanciones no privativas de la libertad y a la cualificación de la atención con enfoque pedagógico, restaurativo y de inclusión social. En el ámbito institucional, el seguimiento se soporta en la consolidación de información de operación de modalidades, avances de planes de atención, articulaciones intersectoriales y resultados asociados a procesos de egreso y postegreso. Sin embargo, se reconoce que la trazabilidad y comparabilidad de indicadores de reintegración exige fortalecer de manera continua los sistemas de información, los estándares de reporte y las capacidades territoriales, para garantizar mediciones oportunas, consistentes y útiles para la toma de decisiones.

7. ¿Cómo se determina la medida más adecuada para cada adolescente según la gravedad del delito?

La determinación e imposición de medidas y sanciones en el SRPA es competencia propia de la autoridad judicial, con sujeción a los criterios legales aplicables y al análisis individual del caso concreto dentro del proceso penal adolescente. En consecuencia, y conforme a la recomendación recibida, la Subdirección de Responsabilidad Penal realizará **remisión por competencia** al Consejo Superior de la Judicatura para que, dentro del ámbito jurisdiccional y de la autonomía judicial, se pronuncie respecto de los criterios y mecanismos que orientan la determinación de la medida más adecuada, de acuerdo con la gravedad del hecho, las circunstancias del caso y las finalidades del sistema.

8. ¿Qué porcentaje de los adolescentes sancionados recibe medidas no privativas de la libertad?

Sobre este aspecto, la Subdirección informa que **se remite documento Excel anexo** con las variables requeridas para la verificación del porcentaje de adolescentes y jóvenes sancionados atendidos en modalidades no privativas de la libertad, conforme a la parametrización institucional y a los criterios de consolidación de información. Adicionalmente, se precisa que el ICBF lidera la Estrategia de Fortalecimiento de las Modalidades No Privativas de la Libertad como respuesta institucional orientada a promover el uso prioritario y razonable de alternativas a la privación de la libertad, en coherencia con lineamientos de política pública nacional que priorizan dichas sanciones y su cualificación con enfoque pedagógico, restaurativo y de inclusión social. Esta estrategia se orienta a fortalecer la implementación de sanciones no privativas mediante acciones que integran enfoques restaurativos y pedagógicos, el desarrollo de estrategias sociocomunitarias, el fortalecimiento de capacidades técnicas de los equipos, la promoción de diálogos regionales y la articulación con autoridades administrativas y judiciales. Desde 2023 se ha avanzado en su implementación y actualización permanente en diversas regionales, con proyección de cobertura nacional.

9. ¿Qué dificultades se presentan en la aplicación de medidas pedagógicas restaurativas?

El Lineamiento Técnico del Modelo de Atención SRPA establece que los programas deben contemplar, respetar y potenciar la condición de sujetos de derechos en formación de los adolescentes y jóvenes, y que las estrategias pedagógicas deben materializar la finalidad pedagógica del sistema. De igual forma, el ICBF promueve el alcance de la finalidad restaurativa mediante procesos pedagógicos y prácticas restaurativas que pueden desarrollarse con o sin participación de autoridades, según el caso.

En la práctica, las dificultades para la implementación efectiva de estas finalidades suelen derivarse de factores concurrentes y territoriales que trascienden la ejecución del operador pedagógico. Entre ellos se encuentran la estabilidad y suficiencia del talento humano, la disponibilidad de oferta intersectorial para atención integral (educación, salud mental y acompañamiento psicosocial), las condiciones de infraestructura, seguridad y recursos, las particularidades de contexto social y comunitario y los niveles de articulación efectiva entre actores del SRPA y entidades territoriales. En consecuencia, la eficacia de medidas pedagógicas y restaurativas requiere concurrencia real de capacidades institucionales, condiciones territoriales adecuadas y articulación intersectorial sostenida.

10. ¿Cómo se garantiza un enfoque diferencial (género, etnia, discapacidad, etc.) en la atención a los adolescentes?

En el SRPA, el ICBF garantiza el enfoque diferencial a partir de la implementación del Modelo de Atención para Adolescentes y Jóvenes en Conflicto con la Ley, el cual incorpora de manera transversal el Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos (MEDD) como fundamento conceptual, metodológico y operativo. Este modelo reconoce que los derechos se ejercen en condiciones desiguales por factores históricos, sociales, culturales, territoriales y estructurales, por lo cual el enfoque diferencial opera como criterio orientador del diseño del modelo, de la prestación del servicio y de la actuación institucional, con el propósito de avanzar hacia

igualdad real y efectiva, no discriminación y protección integral. La garantía del enfoque diferencial se concreta a través de la lectura territorial y poblacional para identificar condiciones particulares y barreras de acceso, la adecuación del servicio y de las estrategias pedagógicas y restaurativas según variables como género, pertenencia étnica, discapacidad, orientaciones sexuales e identidades de género diversas, ruralidad, migración, entre otras; la cualificación del talento humano; la adopción de prácticas institucionales que eviten discriminación, estigmatización o revictimización; la activación de articulaciones intersectoriales para garantía de derechos; y el seguimiento ejercido por Defensorías de Familia en el marco de sus competencias.

11. ¿Qué acciones toma la entidad para evitar la vulneración de derechos dentro de los centros de atención especializada?

En el marco de sus competencias, la Subdirección de Responsabilidad Penal orienta acciones preventivas y de mejora continua dirigidas a reducir riesgos de vulneración de derechos en los servicios del SRPA y a fortalecer la gestión institucional del riesgo. En particular, se resalta la gestión preventiva asociada al **daño antijurídico**, entendida como una herramienta de administración pública que busca anticipar, evitar y mitigar hechos u omisiones que puedan derivar en afectaciones a los derechos de los adolescentes y jóvenes atendidos y, a su vez, comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado. En este sentido, la política institucional se estructura a partir del análisis de las condenas judiciales impuestas con mayor frecuencia contra el Instituto, con el propósito de prevenir los hechos u omisiones por los cuales la entidad ha sido condenada pecuniariamente, y de promover decisiones de gestión orientadas a la protección efectiva de derechos, la reducción de eventos críticos, la disminución de la litigiosidad y el uso eficiente de los recursos públicos.

Bajo ese enfoque, la gestión preventiva se orienta a anticiparse a daños, adoptar medidas para evitar su ocurrencia, reducir la repetición de eventos que generan daño antijurídico, mitigar consecuencias cuando se presenten situaciones de riesgo y fortalecer la capacidad institucional para identificar causas, corregir fallas y robustecer medidas preventivas. En desarrollo de lo anterior, se han impulsado acciones como asistencia técnica permanente a las 33 regionales del ICBF sobre formulación de planes y diligenciamiento de formatos de reporte; asistencia técnica a los operadores pedagógicos respecto de la formulación de planes y reportes; acompañamiento territorial a regionales y operadores priorizados por recurrencia de eventos reportados; articulación con actores del SRPA para mitigar barreras de acceso a servicios de salud cuando se identifica riesgo para la continuidad de tratamientos, especialmente en situaciones asociadas a salud mental; articulación con el sector salud para la realización de capacitaciones técnicas sobre identificación y abordaje de conductas de riesgo; y asistencia técnica continua en temáticas misionales que fortalecen la gestión pedagógica y protectora del servicio.

De cara a 2026, se prevén acciones adicionales orientadas al fortalecimiento preventivo, que incluyen el diseño e implementación de rutas de activación frente a eventos de violencia sexual y el desarrollo de materiales pedagógicos para su apropiación territorial; asistencia técnica para la elaboración de planes de acción basados en eventos reiterativos; seguimiento prioritario a la implementación de planes con riesgo crítico o ausencia de reportes; visitas presenciales a sedes con alta reiteración de eventos para verificación, acompañamiento técnico y

reformulación de planes; convocatoria anual de enlaces regionales responsables de la implementación de la política; y desarrollo de comunidades de aprendizaje para identificar y priorizar territorios con mayores reportes, promoviendo acciones más focalizadas y efectivas.

12. ¿Considera que las políticas actuales responden adecuadamente a la realidad social de los adolescentes infractores?

Las políticas públicas que orientan el SRPA se sustentan en un marco normativo robusto, centrado en la protección integral, el interés superior y el principio de corresponsabilidad entre la Nación y las entidades territoriales. No obstante, su implementación enfrenta desafíos que inciden en el grado de respuesta efectiva frente a la compleja realidad social de los adolescentes y jóvenes vinculados al sistema. Persisten brechas territoriales en capacidad institucional, dificultades en acceso a salud —especialmente salud mental— y barreras para el acceso a oportunidades educativas, formativas y laborales sostenibles durante el cumplimiento de las sanciones y en el postgreso.

En este contexto, el SNCRPA ha venido promoviendo directrices y orientaciones técnicas para fortalecer prevención del delito, justicia restaurativa y atención integral, y para orientar planes de acción territoriales y articulaciones intersectoriales que respondan de forma más pertinente a las realidades familiares, sociales y comunitarias. En consecuencia, puede afirmarse que las políticas actuales constituyen un marco necesario y pertinente, pero su alcance depende de su apropiación territorial, de la capacidad operativa de las entidades responsables y de la disponibilidad de recursos, por lo cual requieren fortalecimiento continuo y articulación efectiva para materializar resultados homogéneos en el territorio.

13. ¿Qué mejoras propondría en el sistema para hacerlo más efectivo en términos de prevención y rehabilitación en adolescentes?

El fortalecimiento del SRPA en términos de prevención y rehabilitación requiere profundizar la implementación articulada de las estrategias existentes y promover nuevas acciones en el marco del principio de corresponsabilidad y de la garantía del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, conforme a la Ley 1098 de 2006. El SRPA, como sistema especializado de naturaleza judicial y administrativa, demanda acciones que trasciendan la fase sancionatoria e incorporen de manera efectiva componentes preventivos y de inclusión social.

En este sentido, el SNCRPA, creado mediante el Decreto 1885 de 2015, cumple la función de coordinar y articular interinstitucional, intersectorial e intersistémicamente a las entidades que hacen parte del sistema, y ha venido promoviendo directrices y orientaciones técnicas para fortalecer estrategias de prevención del delito, justicia restaurativa y atención integral, reconociendo que la efectividad del SRPA depende de la concurrencia de acciones preventivas y de rehabilitación desarrolladas coordinadamente entre la Nación y las entidades territoriales.

De manera particular, resulta fundamental diferenciar niveles de prevención. La prevención primaria, orientada a reducir factores de riesgo y fortalecer factores protectores antes de que se configure una conducta infractora, se materializa mediante programas y políticas dirigidas a niñez, adolescencia, familias y

comunidades, incluyendo acciones de fortalecimiento de habilidades para la vida, acompañamiento familiar, permanencia escolar y generación de entornos protectores. En este nivel, el Instituto cuenta con estrategias dirigidas a población adolescente y juvenil que son lideradas por dependencias misionales competentes, como la Dirección de Infancia y Adolescencia, incluyendo iniciativas comunitarias orientadas a prevención primaria.

Por su parte, la prevención terciaria, entendida como prevención de la reiteración, se dirige a adolescentes y jóvenes una vez han finalizado el cumplimiento de las sanciones impuestas en el SRPA, y se enfoca en adoptar acciones integrales orientadas a reducir factores de riesgo, evitar nuevas vinculaciones al sistema y favorecer procesos de inclusión social, consolidando proyectos de vida en el marco de la legalidad. En este nivel, el ICBF contempla la modalidad de apoyo postinstitucional prevista en sus lineamientos técnicos, como herramienta de acompañamiento para adolescentes y jóvenes egresados, articulada a la gestión de oferta educativa, formativa, laboral, cultural y comunitaria. En desarrollo del principio de corresponsabilidad, la prevención del delito y la prevención de la reiteración no constituyen una responsabilidad exclusiva del ICBF.

Los demás actores del SNCRPA, incluyendo de manera relevante a los entes territoriales, están llamados a diseñar, implementar y fortalecer servicios y estrategias que contribuyan tanto a prevención primaria como a prevención terciaria. Esto implica ampliar y sostener oferta territorial en educación, formación para el trabajo, salud mental, cultura, deporte y acompañamiento psicosocial, y garantizar el acceso efectivo de adolescentes y jóvenes vinculados y egresados del SRPA a dicha oferta. En esa línea, el SNCRPA, a través de sus instancias nacionales y comités departamentales y distrital, promueve la coordinación interinstitucional e intersistémica para la formulación, ejecución y seguimiento de acciones de prevención del delito y de prevención de la reiteración, asegurando la concurrencia de sectores de justicia, protección, educación, salud y desarrollo social y orientando respuestas integrales acordes con realidades territoriales.

Así las cosas, para garantizar sostenibilidad y efectividad, se considera necesario que las estrategias de prevención del delito y prevención de la reiteración se incorporen de manera expresa en los planes de desarrollo departamentales y municipales, en coherencia con directrices del SNCRPA y con las responsabilidades asignadas a los entes territoriales, fortaleciendo la articulación con políticas públicas y la continuidad de la oferta requerida.

La presente respuesta no constituye concepto jurídico alguno, toda vez que no es competencia de esta dependencia y se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF reitera su disposición para continuar articulando, en el marco de sus competencias, las acciones técnicas, administrativas e interinstitucionales que resulten necesarias para el fortalecimiento del SRPA y la garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes vinculados al sistema. En todo caso, dichas actuaciones se desarrollarán con sujeción al principio de corresponsabilidad entre la Nación y las entidades territoriales y al marco de coordinación previsto en el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad



Penal para Adolescentes, promoviendo la concurrencia de los sectores y actores incidentes para asegurar una respuesta integral, oportuna y territorialmente pertinente.

Atentamente,

MAGALLY MACIAS ACEVEDO
Subdirectora de Responsabilidad Penal

Anexos: Anexo 01 - Aporte de respuesta SIM No. 1764914675- No privativas

	Nombre y Apellido	Cargo	Área de trabajo	Fecha
Revisó	José David Tarazona	Contratista	Subdirección de Responsabilidad Penal	03-02-2026
Proyectó	Gina Lorena Veloza Pinzon	Contratista	Subdirección de Responsabilidad Penal	03-02-2026
Proyectó	Jenny Lorena Martínez Caceres	Contratista	Subdirección de Responsabilidad Penal	03-02-2026
Proyectó	Carlos Andres Barrera Espinosa	Contratista	Subdirección de Responsabilidad Penal	03-02-2026
Proyectó	Diego de la Pava Coca	Contratista	Subdirección de Responsabilidad Penal	03-02-2026
Proyectó	Ana Estephania Manrique Sánchez	Contratista	Subdirección de Responsabilidad Penal	03-02-2026
Proyectó	Daniela Torres Vargas	Contratista	Subdirección de Responsabilidad Penal	03-02-2026
Proyectó	Doris Magali Ramos Munar	Contratista	Subdirección de Responsabilidad Penal	03-02-2026
Proyectó	Johan Hernando Barrios Briceno	Contratista	Subdirección de Responsabilidad Penal	03-02-2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.				